

# Argentina y el modelo mixto de regulación de Internet y las RRSS

JOHANNA PÉREZ DAZA

MIEMBRO DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REVISTA *COMUNICACIÓN*

“El Internet que conocemos está desapareciendo” afirma Moisés Naím, especialista en temas internacionales, quien vaticina una reconfiguración de la red en tres bloques claramente diferenciados:

La Internet norteamericana “[...] es anárquica, innovadora, comercial y con altas tendencias monopolistas. Los protagonistas centrales son las grandes empresas tecnológicas. Su capital, talento tecnológico y capacidad de innovar le confieren un dinamismo que no tienen sus rivales”.

La Internet europea “[...] es más regulada, trata de proteger a los usuarios, enfrenta los monopolios y defiende valores democráticos”.

La Internet china “[...] es cerrada, censurada, proteccionista y tiene altas barreras a la entrada para empresas de los países que están fuera de sus fronteras digitales”.

Cada modelo presenta sus vulnerabilidades y riesgos, unos más evidentes que otros, y aunque no sepamos si se impondrá uno de ellos o sus posibles combinaciones en grados y niveles también inciertos, conviene reflexionar sobre cómo estos cambios y desafíos son asumidos desde las

políticas públicas y los gobiernos de la región latinoamericana que, al parecer, se mueven en la hibridación de los bloques arriba mencionados. A continuación revisaremos sucintamente el caso argentino a partir de algunos documentos y datos que permiten delinear el marco legal en la distribución y/o emisión de información.

Como candidato presidencial, el actual mandatario Alberto Fernández propuso una ley que regulara el uso de las redes sociales y contenidos creados por los medios. Más recientemente, en el 2020, volvió el debate esta vez a causa de las declaraciones del senador nacional Alfredo Luenzo, quien considera que: “Es necesaria una regulación pública, democrática y equilibrada de las plataformas y redes sociales y establecer un sistema más justo que beneficie a medios por el uso de sus contenidos y búsquedas en las plataformas” (según publicó en su cuenta de twitter el 18 de abril de 2020, a la 1:31 p.m.). En su momento también se estableció el debate sobre un “Régimen legal para influencers”, el cual se basa en un proyecto de ley que busca regular las publicidades que los usuarios hagan en sus perfiles, especificando las publicaciones pagas.

## HABLEMOS

El Informe *Artículo XIII sobre control estatal de las redes sociales* (2016) editado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información señala textualmente que:

– En el caso de Argentina la garantía de la libertad de expresión está protegida por la Constitución Nacional en los artículos 14 y 32. Además, en 1994 fueron incorporados con jerarquía constitucional diferentes tratados internacionales de derechos humanos, que también protegen la libre expresión de ideas, opiniones e información. Asimismo, en 1997 dicha protección constitucional fue extendida a Internet, en virtud del decreto 1279/97.

– Posteriormente, en 2005 se sancionó la ley 26.032, que estableció que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas a través de Internet quedaba comprendida dentro de la garantía constitucional de la libertad de expresión. En 2009 fue sancionada la ley 26.551, por la cual se eliminaron los delitos de calumnias e injurias para los casos de expresiones que se refieran a asuntos de interés público, posean o no carácter asertivo.

– No existe legislación que establezca el filtrado o bloqueo automático de sitios web, páginas, plataformas, redes sociales o blogs. En este sentido, los argentinos cuentan con un amplio acceso a contenidos online. No obstante, la ley 25.690, ordena a las empresas proveedoras de servicios de Internet que ofrezcan software de protección que impidan el acceso a sitios específicos. Por otro lado, en ciertas provincias y ciudades argentinas se han sancionado leyes que ordenan el bloqueo de sitios pornográficos en lugares públicos como bibliotecas o establecimientos educativos.

– En 2008 se sancionó la ley 26.388 de Delitos Informáticos, que agregó nuevos delitos al Código Penal, con el objetivo de reprimir la posesión y distribución de pornografía infantil, la interceptación de comunicaciones y sistemas electrónicos, el hackeo, entre otros.

– En diciembre de 2014 se sancionó la ley Argentina Digital, que cambió de manera significativa la estructura de regulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). De esta manera, se crearon tres nuevos organismos de regulación: la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), el Con-

sejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, y la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización. La autoridad de aplicación de la ley era la AFTIC, que asumió funciones que le correspondían a la anterior Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y estaba conformada por un directorio integrado por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo.

– El cambio de gobierno de 2015 trajo modificaciones a la ley de Argentina Digital, lo cual se vio reflejado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se creó el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) y se disolvió la AFTIC y el AFSCA (ente regulador de los servicios audiovisuales). Así, el ENACOM se convirtió en la nueva autoridad de aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la ley de Argentina Digital.

Por su parte, Mutiz Arévalo y otros investigadores estudiaron los modelos de regulación jurídica de las redes sociales virtuales de varios países concluyendo que en América Latina estos responden a un modelo mixto que integra el europeo y el norteamericano, y recoge las bondades de cada uno creando un paradigma mixto de regulación cuya fuente originaria de derecho parte de la ley emanada del órgano legislativo, como también de entes privados u organizaciones descentralizadas con sus propios mecanismos de regulación (ver la sección DOCUMENTO). Además, afirman que:

Lo cierto es que el modelo latinoamericano está conformado por un conjunto de normas expedidas por el poder legislativo que permiten a los Estados imponer sanciones a los infractores y brindar a los usuarios seguridad jurídica, estableciendo un mecanismo de control parcial sobre la red sin llegar a menoscabar la libertad de expresión, a su vez, este nuevo ejemplo de regulación confiere competencia a instancias privadas para regular las acciones de los usuarios en internet.

Destacan que desde 1993 Latinoamérica ha desarrollado leyes para intentar regular los posibles delitos y acciones nocivas desprendidas del uso de Internet. Sobre Argentina señalan que es un país pionero en esta materia con la Ley 11.723

de 1993, para la protección de los derechos de autor a través de Internet, y también cuenta con la Ley 943 de 2002 y la Ley 25.690 de 2003, que regulan a los proveedores de Internet.

Precisamente, la gobernanza de Internet conlleva a revisar también a los proveedores y administradores de los servicios de telecomunicaciones. Al respecto, Recalde y Contissa señalan que:

En Argentina los tubos, cables, fibra óptica, routers y centros de datos, son controlados por las mismas empresas que proveen servicios de telecomunicaciones. El mercado tiene tres compañías protagonistas: Cablevisión (Grupo Clarín), Speedy (Telefónica) y Arnet (Telecom). Telecom y Cablevisión se fusionaron en el último gobierno. La conexión de Argentina con Internet depende, casi en su totalidad, de tres cables submarinos que convergen en la localidad de Las Toninas. El despliegue de la infraestructura está en manos de un puñado de corporaciones privadas nacionales y multinacionales.

Al considerar los tres bloques o modelos presentados al inicio, consideran que:

En la Argentina Internet funciona en base a los principios de los Modelos 1 y 2, aunque el primer esquema es el predominante ya que las principales plataformas y el software utilizado es norteamer-

icano. La infraestructura que permite la conectividad está en manos de empresas privadas.

En este sentido coinciden con la utilización de un modelo mixto.

Lo antes expuesto encierra un debate central: ¿es posible una Internet global, descentralizada, no gubernamental, abierta y gratuita?, una pregunta compleja para la que aún no hay respuestas definitivas, sino intentos, ensayos y errores. Toca a cada país seguir ajustando según sus propias dinámicas, sin menoscabo de los escenarios globales, lo que implica acompañar el ritmo, descartar, adoptar, proponer e innovar.

### Referencias:

- ARÉVALO MUTIZ, Paula Lucía; NAVARRO HOYOS, Julián Antonio; GARCÍA LEGUIZAMÓN, Fernando; CASAS GÓMEZ, Catalina (2011): "Modelos de regulación jurídica de las redes sociales virtuales". En: revista *VIA IURIS*. (11). Pp.109-135. [fecha de Consulta 28 de abril de 2021]. ISSN: 1909-5759. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273922799007>
- NAÍM, Moisés (2020): El Internet que conocemos está desapareciendo. [fecha de Consulta 21 de abril de 2021] Disponible en: <https://www.moisesnaim.com/mis-columns/2020/12/6/el-internet-que-conocemos-est-desapareciendo>
- RECALDE, Aritz y CONTISSA, Luciana (2020). *La regulación de Internet en la Argentina*. fecha de Consulta 21 de Abril de 2021] Disponible en: <https://www.ncn.com.ar/la-regulacion-de-internet-en-la-argentina/>